

Santiago, dos de mayo de dos mil veinticinco.

Vistos:

En estos autos, en Rol N° C-6405-2020 del Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Santiago, en procedimiento ordinario de indemnización de perjuicios, por sentencia de quince de febrero de dos mil veintidós, acogió la excepción de cosa juzgada opuesta por el Fisco de Chile, rechazándose la demanda interpuesta por Ulises Robinis Reinoso en contra del Fisco de Chile, con costas.

Impugnada esa decisión, la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de veinte de septiembre de dos mil veintidós, en la causa Rol 7103-2022, la confirmó.

Contra esa sentencia, la demandante dedujo recurso de casación en el fondo, el que se ordenó traer en relación.

Considerando:

1º) Que, el libelo impugnatorio denuncia en primer lugar, que la denegación de reparación solicitada por la víctima demandante, basada en acoger la excepción de carácter perentorio de cosa juzgada, vulnera el Estatuto Constitucional de Responsabilidad del Estado, cuyos cimientos se encuentran en las Bases de la Institucionalidad, artículos 1, 4, 5, 6 y 7, 38 inciso 2° de la Constitución política de la República, como así también, el Derecho Internacional que corresponde ser aplicado al caso, esto es, el artículo 1.1, 2, 63.1, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, derecho consuetudinario, Principios Generales del Derecho Internacional y normas del ius cogens.

Luego, indica que en la sentencia recurrida se aplica, igualmente, de forma errónea el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en contravención a las disposiciones normativas del Derecho Internacional Humanitario, así como a las normas del ius Cogens.

Refiere que, la interpretación realizada en la sentencia efectivamente niega la validez y eficacia de la normativa jurídica internacional que versa sobre los



Derechos Humanos, y la normativa Constitucional, inobservando la obligación que pesa sobre el Estado de Chile de reparar y pagar una justa indemnización a la víctima.

Cita jurisprudencia en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que no es posible que el Estado obvie su obligación respecto de su responsabilidad extracontractual en este tipo de casos, no pudiendo sostener una situación de impunidad. En ese sentido, la institución de cosa juzgada no debe constituir un obstáculo judicial para obtener la debida reparación, más cuando la sentencia que la contraria presenta en el juicio de autos para hacer valer la cosa juzgada desecha la demanda por estimar la acción prescrita.

Explica que la sentencia impugnada es contraria al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, recogido por nuestro artículo 5 de la Constitución Política de la República, ya que no es jurídicamente correcto sostener que el control de convencionalidad de las normas nacionales no alcanza la institución de la cosa juzgada, en tanto se trataría únicamente de una norma procedimental y, por tanto, inmodificable.

En primer término, por cuanto la excepción perentoria de cosa juzgada, y tal como su nombre lo indica, no es una excepción meramente procedimental, sino que se trata de una institución sustantiva que, al igual que la prescripción, se encuentra regulada como excepción perentoria en contraposición a las excepciones dilatorias, como son la *litis pendencia* o la falta de personería entre otras.

En segundo término, en tanto la jurisprudencia de la Corte Interamericana de DDHH, caso Ordenes Guerra y Otros vs. Chile ya citada, hace expresa mención a la imposibilidad del Estado de asilarse en dicha institución con el objeto de rechazar el derecho de víctimas y familiares de graves violaciones a los derechos humanos de obtener una reparación integral.



Con base en lo expuesto, solicita se invalide la sentencia recurrida y acto seguido, sin nueva vista, pero separadamente, se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo que acoja en todas sus partes la demanda civil deducida.

2º) Que conforme se extrae de autos, resultan como hechos indiscutidos:

a.) Que en la causa Rol N° 6407–2011 de esta Corte Suprema se conoció y resolvió el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que se pronunció a su vez sobre el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada por el Quinto Juzgado Civil de Santiago, compareciendo como actor, entre otros, Ulises Robinis Reinoso y como demandado el Fisco de Chile.

b.) Que en esa causa, como en la presente, se ejerció acción de indemnización de perjuicios, siendo el beneficio jurídico impetrado el pago de una suma de dinero.

c.) Que el fundamento inmediato de la acción de indemnización de perjuicios son los daños causados a distintas víctimas de crímenes de lesa humanidad, entre ellos Ulises Robinis Reinoso, a consecuencia de hechos perpetrados por agentes del Estado, pretensión que fue rechazada.

3º) Que la pretensión hecha valer por la parte recurrente dice relación con que se reconozca y declare la responsabilidad del Estado de Chile, representado en autos por el Fisco de Chile, en la comisión de conductas que se consideran crímenes y delitos de lesa humanidad.

Tal pretensión no significa en caso alguno desvirtuar la legalidad del procedimiento seguido antes para resolver esta misma materia, en los que se declaró la prescripción de la acción civil indemnizatoria intentada contra el Estado de Chile, sino únicamente afirmar que la institución de la cosa juzgada no puede excusar a éste del deber de reparar íntegramente los daños causados con las violaciones de derechos humanos cometidas por sus agentes.

4º) Que el artículo 1º de la Convención Americana de Derechos Humanos establece con claridad dos de las obligaciones más importantes que nacen para



los Estados parte, estas son, las de respetar los derechos humanos y garantizar su ejercicio y goce. Por consiguiente, convencionalmente para el Estado de Chile y demás Estados parte, las consecuencias o efectos jurídicos de estas obligaciones son la exigibilidad inmediata de respeto de los derechos humanos y en el plano individual la tiene frente a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción, sin discriminación alguna.

En consecuencia, la obligación de respetar dicho ejercicio y goce exige al Estado y a todos sus agentes abstenerse de violar los derechos humanos establecidos en la Convención Americana.

Por su parte, la obligación de garantizar exige al Estado el deber ineludible de emprender las acciones necesarias para asegurar que todas las personas sujetas a su jurisdicción siempre estén en condiciones de ejercerlos y de gozarlos en forma íntegra.

5°) Que, con relación a lo anterior, en el Caso Velásquez Rodríguez con Estado de Honduras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que dicha obligación implica que el Estado está obligado a organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, “la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos”.

6°) Que, en este orden de ideas, de acuerdo al deber de todos los órganos del Estado de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Constitución Política de la República, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, el Estado debe cumplir con las normas sobre derechos humanos y al



implícitamente no hacerlo luego del requerimiento, al controvertirse por cualquier medio tal principio de favorabilidad que protege a la persona afectada, se debe aplicar por el tribunal el Derecho interno de conformidad y en armonía con dichas normas internacionales de los derechos humanos, cumpliendo así con la obligación de hacer el adecuado control de Convencionalidad, interpretando y aplicando las normas nacionales que pudieren afectar derechos humanos de acuerdo con las obligaciones internacionales contraídas en la materia. Sin que ninguna norma del Derecho interno permita alguna distinción que vaya en contra del cumplimiento de tal responsabilidad.

7º) Que es un principio general de Derecho Internacional, el que los Estados se obligan a cumplir los tratados de buena fe. Por lo que el Estado no puede descansar en la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones internacionales, porque se lo impide su legislación interna (artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados), dado que tiene que observar las disposiciones del tratado en toda su integridad. Máxime si el tratado a aplicar ha recibido toda la fuerza legal interna al haber sido ratificado y haber cumplido todos los trámites establecidos en el ordenamiento jurídico para su promulgación.

8º) Que la importancia de los razonamientos efectuados es que permiten aseverar que, al aplicar el control de convencionalidad, sin ningún género de dudas, se constata la irrelevancia de cualquier excepción de cosa juzgada en relación con la acción civil que pretende la reparación íntegra de los daños y perjuicios derivados de la ejecución de esta categoría de ilícitos, por no respetar las disposiciones imperativas inherentes al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

9º) Que todo lo que se lleva reflexionado evidencia el error de Derecho en que incurre la sentencia en examen, pues hace primar lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil sobre la normativa internacional examinada que impone al Estado de Chile el deber de reparar íntegramente las graves



violaciones a los derechos humanos que demandan los familiares de las víctimas y cuya existencia no ha sido controvertida. Ese yerro ha tenido influencia en lo dispositivo del fallo, pues impidió pronunciarse al tribunal sobre las demandas deducidas contra el Fisco de Chile y, por consiguiente, establecer la responsabilidad extracontractual de éste por las acciones y omisiones de sus agentes establecidas en el fallo en examen.

10°) Que, en el sentido que se viene razonando se ha pronunciado previamente esta Corte en su jurisprudencia, como lo confirman las sentencias dictadas en causas 144.348-2020, rol 32.012-2022, rol 31.940-2022, rol 102.892-2023.

11°) Que, en síntesis, no se desconoce aquí la validez y legalidad de los fallos anteriores, incluso dictados por esta propia Corte que declaran la prescripción de la acción indemnizatoria contra el Estado de Chile, sino sólo se reconoce que la excepción de cosa juzgada derivada de esos pronunciamiento consagrada en el citado artículo 177, norma interna de carácter meramente legal, debe ceder ante el derecho a una reparación integral derivado de los tratados internacionales en materia de derechos humanos ya referidos, que por disposición del inciso 2° del artículo 5° de nuestra Carta Fundamental tienen una jerarquía superior.

12°) Que, entonces, se hará lugar al recurso de casación en el fondo deducido por el abogado Mario Cortés Muñoz, en contra el fallo en estudio que acoge la excepción de cosa juzgada opuesta por el Fisco de Chile respecto de los recurrentes, anulándose la sentencia y dictándose una de reemplazo que desestime dicha excepción y acoja la acción indemnizatoria.

Por estas consideraciones y lo previsto en los artículos 767, 785 y 805 del Código de Procedimiento Civil, **se acoge el recurso de casación en el fondo**, deducido por el abogado don Mario Cortés Muñoz, en representación de Ulises Robinis Reinoso, en contra de la sentencia de veinte de septiembre de dos mil



veintidós, la que en consecuencia es nula y que se reemplaza por la que se dicta a continuación, separadamente y sin nueva vista.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Eduardo Gandulfo Ramírez.

Regístrese.

Rol N° 133.107-2022.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Manuel Antonio Valderrama R. y Leopoldo Llanos S., Ministras suplentes Sras. Eliana Quezada M. y María Carolina Catepillán L., y el Abogado Integrante Sr. Eduardo Gandulfo R.. No firman las Ministras (S) Sras. Quezada y Catepillán, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por haber terminado su periodo de suplencia. Santiago, 02 de mayo de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 02/05/2025 10:31:48

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 02/05/2025 10:31:49

EDUARDO NELSON GANDULFO
RAMIREZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 02/05/2025 10:31:49



En Santiago, a dos de mayo de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, dos de mayo de dos mil veinticinco.

En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus considerandos sexto a undécimo, que se suprimen.

Del fallo de casación que precede, se reiteran sus motivos tercero a undécimo.

Y teniendo además presente:

PRIMERO: Que, la indemnización del daño producido y la acción para hacerla efectiva, son de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material, que tienen como objeto obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados por el actuar de agentes del Estado de Chile, ya que así lo demanda la aplicación de buena fe de los tratados internacionales suscritos por nuestro país y la interpretación de las normas de Derecho Internacional consideradas ius cogens por la comunidad jurídica internacional. Dichas normas deben tener aplicación preferente en nuestro ordenamiento interno, al tenor de lo que dispone el artículo 5° de la Constitución Política de la República, por sobre aquellas disposiciones de orden jurídico nacional que posibilitarían eludir las responsabilidades en que ha incurrido el Estado chileno, a través de la actuación penalmente culpable de sus funcionarios, dando cumplimiento de este modo a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.



SEGUNDO: Que, para los efectos de la determinación del daño reclamado, es conveniente tener en cuenta que el daño moral consiste en la lesión o agravio, efectuado culpable o dolosamente, a un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona y que es imputable a otro. Esta particularidad hace que no puedan aplicarse al momento de precisar su existencia y entidad, las mismas reglas utilizadas para la determinación de daños materiales, pues en tal evento se trata de una alteración externa y fácilmente perceptible, lo que no acontece en el plano subjetivo. Como lo ha señalado anteriormente esta Corte, el menoscabo moral, por su índole netamente subjetiva y porque su fundamento arranca de la propia naturaleza afectiva del ser humano, no es, sin duda, de orden puramente económico y no implica, en consecuencia, un deterioro real en el patrimonio de quien lo sufre, susceptible de prueba y de determinación directa, por lo que queda enteramente entregado a la regulación prudencial de los jueces de instancia, tomando en consideración aspectos como las circunstancias en que se produjo y todas aquellas que influyeron en la intensidad del dolor y sufrimiento experimentado (SCS rol N° 17.842-2019 de 11 de octubre de 2019).

TERCERO: Que, en este entendido, acreditados como han sido los hechos denunciados, el contexto en que se perpetraron y la participación culpable y penada por la ley de los agentes del Estado que intervinieron, surge la efectividad del padecimiento del daño moral, de manera que el Estado debe reparar ese detrimento, por el hecho de sus agentes, cuya determinación concierne a la prudencia del tribunal, y no podría ser de otro modo porque materialmente es difícil, sino imposible, medir con exactitud la intensidad del sufrimiento que



provocaron la detención y tortura que padeció Ulises Robinis Reinoso, durante el periodo que permaneció privado de libertad entre los años 1986 a 1988.

CUARTO: Que, apreciando las probanzas rendidas y los hechos que se tuvieron por establecidos en el fundamento primero del fallo que se revisa, que no fueron impugnados por el demandado, se determina prudencialmente la indemnización de ese padecimiento en la suma de \$ 100.000.000 (cien millones de pesos).

Para dicho efecto, esta Corte consideró el artículo 14 de la Convención contra la Tortura, que establece la obligación de todo Estado —ergo, de sus órganos— de velar porque se garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible, como también lo que dispone el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 170, 186, 187 y 227 del Código de Procedimiento Civil, artículos 1551, 2314 y 2329 del Código Civil y los artículos 6, 38 y 19 N° 22 y 24 de la Constitución Política de la República, **Se revoca** dicho fallo sólo en cuanto, acogió la excepción de cosa juzgada opuesta por el Fisco de Chile y, en su lugar, se rechaza dicha excepción y, en consecuencia, se hace lugar a la demanda civil de indemnización de perjuicios, interpuesta en representación de Ulises Robinis Reinoso, condenándose al Fisco de Chile a pagar al demandante, por concepto de daño moral, la suma de \$100.000.000 (cien millones) de pesos, más reajustes desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada hasta su pago efectivo e intereses



desde que se constituya en mora, sin costas por haber tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Eduardo Gandulfo Ramírez.

Rol N° 133.107-2022.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Manuel Antonio Valderrama R. y Leopoldo Llanos S., Ministras suplentes Sras. Eliana Quezada M. y María Carolina Catepillán L., y el Abogado Integrante Sr. Eduardo Gandulfo R.. No firman las Ministras (S) Sras. Quezada y Catepillán, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por haber terminado su periodo de suplencia. Santiago, 02 de mayo de 2025.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 02/05/2025 10:31:51

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 02/05/2025 10:31:51

EDUARDO NELSON GANDULFO
RAMIREZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 02/05/2025 10:31:52



En Santiago, a dos de mayo de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

